

Violencia y política

Cuatro elementos de reflexión teórica alrededor del conflicto colombiano

Desde hace algún tiempo, autores como Cornelius Castoriadis o Claude Lefort nos han invitado a pensar en otros términos “lo político”, a dejar de considerarlo como una instancia específica y objetiva, para identificar en él la manera como las relaciones sociales se encuentran comprometidas desde un comienzo en un proceso de conformación o de escenificación. La posición del poder, exterior con relación a lo social, consistiría sobre todo en ser un foco de visibilidad a través del cual una sociedad múltiple logra percibir su unidad. En el caso de la democracia, siguiendo a Claude Lefort, el poder, como se sabe, no sería más que un lugar vacío.

Un análisis de esta naturaleza, que otorga un lugar tan importante a lo simbólico y a lo imaginario, considera sin embargo como algo evidente de por sí, según parece, que el imaginario tiene una unidad, de manera similar a como la tiene la sociedad que se descifra a través de él, a pesar de las divisiones que la atraviesan. Claude Lefort, en sus contribuciones sobre la historia política del siglo XIX, resalta sin embargo la persistencia de una división radical entre diversas concepciones del orden social, por consiguiente entre varios imaginarios. Por lo demás, incluso si un imaginario es el que domina, elementos extraños pueden amenazarlo: “los enemigos de la revolución francesa” o la irrupción posible de la barbarie, tan temida por Guizot.

Estas consideraciones preliminares adquieren un mayor relieve cuando se trata de reflexionar sobre Colombia donde, a pesar de la existencia de formas democráticas relativamente estables desde hace varias décadas, lo político no parece dar mucha importancia a la producción de un imaginario “democrático”. Además, en el momento actual el país se encuentra de nuevo signado por fenómenos de violencia generalizada que parecen despojar de cualquier sentido a la idea de “institución de lo social” o, al menos, complicarla de manera particular.

No es este el lugar para abordar el problema de las representaciones colectivas que han acompañado en la historia colombiana la creación de procedimientos más o menos democráticos. Esta reflexión nos llevaría a considerar el problema de la compatibilidad entre las adhesiones personalistas, que algunos consideran impregnadas de *Ancien Régime*, y el lenguaje de la soberanía popular; nos obligaría igualmente a interrogarnos sobre la compatibilidad entre la experiencia de una sociedad dividida “naturalmente” en dos subculturas “políticas” transmitidas de generación en generación, de acuerdo con las familias y los lugares, y la posibilidad de pensar un universo común de lo político: ¿cómo podría el poder asumir una función de instauración simbólica si la sociedad se presenta dividida en su “origen”?

Digámoslo de una vez por todas: Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no conoció los momentos fundadores producidos por las movilizaciones populistas o nacionalistas. Ante la ausencia de una fase durante la cual “el pueblo” hubiera sido convocado y la imagen de una unidad nacional hubiera adquirido alguna consistencia, no hay razón para asombrarse de que el Estado haya tenido un papel limitado en la regulación de las relaciones sociales, que la escena política haya estado constantemente fragmentada y que la “ley”, lejos de tener una significación instituyente, haya sido percibida pura y simplemente como el producto de transacciones fluidas y precarias, que en la práctica han hecho posible todo tipo de acomodos y transgresiones. La estabilidad del régimen durante los dieciséis años (1958-1974) en que los dos partidos tradicionales se repartieron por mitades la totalidad de los puestos políticos y administrativos fue vivida como un arreglo *ad-hoc*, que nada tenía que ver con “la invención democrática” y no suscitó de manera duradera mucho entusiasmo. Arreglos semejantes han sido hechos periódicamente a lo largo de la historia colombiana porque, ante la falta de algo mejor, son muy útiles para contener una violencia que es percibida (o imaginada) como una dimensión que atraviesa de manera permanente las relaciones sociales.

Al hablar de “violencia generalizada” queremos sugerir desde el principio que ésta, tanto en su primera irrupción durante los años 1946–1957 como en

su segunda aparición a partir de 1980, no se puede reducir a una guerra política ni a un conflicto social. Si bien la violencia se apoya en ambas modalidades, las desborda y tarde o temprano provoca, por lo demás, su descomposición. El uso constante del término “violencia” que hacen los colombianos deja entender que, en su concepción, se trata de una fuerza anónima e incontrolable que se sustrae a las determinaciones sociales y es asumida de una manera aleatoria por las entidades sociales y los individuos más diversos.

Para todos es evidente que es posible, en un primer momento, identificar los actores que convierten la violencia en una estrategia. Pero todo pasa como si, a medida que estas estrategias se extienden, ellas mismas suscitaran otra violencia que haría desplazar todos los puntos de referencia anteriores, tanto los que se refieren a las identificaciones políticas como los que están en relación con las interacciones sociales más ordinarias. Al prolongarse, la violencia parece convertirse a su vez en una forma normal y ordinaria de estas interacciones. Los analistas que se dedican a hacer la cuenta y la clasificación de las víctimas de “la violencia” actual –la tasa global de homicidios coloca a Colombia en los primeros rangos en el mundo–, no dejan de resaltar que sólo un pequeño porcentaje puede ser directamente imputado a causas políticas o a la acción de grupos organizados de narcotraficantes; los mayores porcentajes están ligados al arreglo de cuentas o a las disputas rutinarias. Nos encontramos aquí frente a una relación circular: las estrategias organizadas de violencia propician el uso de la violencia en los litigios más banales; esta difusión de la violencia favorece, por su parte, el hecho de que las estrategias organizadas de violencia terminen por parecer inscritas en el orden de las cosas.

Al estudiar los fenómenos recientes de violencia en Colombia, nuestro propósito ha sido sobre todo analizar una situación en la cual las turbulencias de la sociedad no son de manera alguna las premisas para una redefinición del imaginario político. El lugar que tiene el imaginario político en esta situación se ha reducido con el paso del tiempo. Las diversas acciones que concurren en la violencia tienen un ilimitado carácter prosaico. Bien sea que se inspiren al comienzo en grandes escatologías políticas; que asuman –en ocasiones y en ciertas zonas– los rasgos de una especie de consentimiento de la población en un pacto hobbesiano; que remitan – algunas veces y un poco por todas partes– a juegos estratégicos entre numerosas redes sociales y económicas que se reparten el territorio; que se reduzcan, en numerosas oportunidades como acabamos de decirlo, a disputas interindividuales, las acciones violentas terminan por confundir radicalmente no sólo los puntos de referencia sino las fronteras mismas de lo político y entran tanto la posibilidad de la visibilidad que está en la base de lo político como el sentimiento de pertenencia a una sociedad.

Los cuatro temas que presentamos enseguida no tienen pretensión de sistematicidad; son más bien *esbozos* yuxtapuestos de razonamientos destinados a alimentar el debate.

LA DIVISIÓN AMIGO-ENEMIGO Y SU DISEMINACIÓN

En la medida en que el recurso a la violencia es, en un principio, el producto de la decisión de actores que se presentan como actores políticos, el uso de este recurso pasa por la capacidad que éstos tengan de imponer una representación de la política en términos de una división amigo-enemigo.

Durante la violencia de los años 1946–1960, no era realmente muy difícil poner en primer plano una representación de esta naturaleza. La convicción de que la sociedad estaba condenada a estar eternamente dividida entre dos subculturas, portadoras de dos concepciones opuestas del orden social, convertía la división amigo-enemigo en fundamento de lo político.

En el período reciente la situación se presenta de otra manera. La referencia a una división de este tipo no puede ya ser presentada como algo evidente de por sí, es decir, como si estuviera inscrita “naturalmente” en lo social. Sólo puede ser construida. De allí se deriva el empeño explícito de los actores revolucionarios que tratan de demostrar que la violencia ha sido fabricada por el mismo régimen y por las relaciones sociales de las cuales este último es la expresión, para hacer de su propia violencia el único instrumento susceptible de responder a una situación de injusticia fundamental.

Con excepción de un pequeño período hacia 1980, esta lectura política no ha logrado imponerse. La referencia a la división amigo-enemigo, fundadora de la relación política global, se ha convertido, a medida que los fenómenos de violencia se diversifican, en una manera de caracterizar los tipos de litigio más diversos. Sometida a una diseminación permanente esta referencia ha perdido su poder para designar el rasgo más sobresaliente de la sociedad y, por consiguiente, para mantener su sentido político.

FIGURAS DEL PACTO HOBBSIANO

¿Como dar cuenta del encuadramiento en redes de poder –guerrillas, milicias locales, organizaciones de autodefensas o paramilitares– de inmensos sectores de la población? Nos parece que las condiciones y las formas de “adhesión” de las poblaciones remiten en una gran medida a un proceso previo de carencia o de crisis de modelos globales o parciales de regulación social: la precariedad de las formas de existencia colectiva o, en ciertos casos, la frecuencia de las situaciones de “desafiliación”, según el término de R. Castel, son su expresión.

Las zonas en que esta “adhesión” se produce más masivamente son, como ha sido mostrado ampliamente, aquellas que han sido ocupadas recientemente como consecuencia de las migraciones de múltiples procedencias. Además, el dominio del Estado prácticamente no se ejerce en estas regiones. Este fenómeno de ocupación de nuevas tierras se ha incrementado enormemente en los últimos veinte años, gracias sobre todo al auge de la economía de la droga que ha atraído hacia regiones periféricas a pobladores tradicionales del campo, pero igualmente a habitantes de la ciudad. No obstante, este movimiento de población ha sido constante en Colombia desde el siglo XVIII. Los campesinos o los “rebeldes” (vencidos en las guerras civiles, esclavos evadidos o trabajadores del campo deseosos de escapar a la tutela de los propietarios) han visto casi siempre en este recurso una forma de sustraerse a la influencia de los dominadores. Los núcleos que de esta manera se han creado, lejos de las autoridades, han sido percibidos constantemente por el centro como lugares “sin Dios y sin ley”. Y de hecho, ante la ausencia de algún tipo de mediación institucional, el tratamiento de los litigios sólo se puede llevar a cabo allí de una manera expedita. Esta situación se ha reproducido, en otra escala, con la circulación inesperada de abundantes cantidades de dinero resultado de las actividades de la droga. Incluso allí donde existían anteriormente formas de cooperación espontánea entre los nuevos habitantes éstas se han dislocado cuando el dinero se ha expandido profusamente. El gasto ostentoso y festivo se ha impuesto, acompañado del uso de la violencia.

En las zonas donde se desarrollan los cultivos comerciales más clásicos, las tensiones sociales, por muy intensas que sean, sólo raramente han podido producir acciones colectivas. La debilidad de las regulaciones institucionales, las estrategias políticas clientelistas que alimentaban la fragmentación del territorio, el recurso a la fuerza privada como procedimiento normal de solución de los conflictos, no favorecen mucho tales acciones. Sin embargo, allí donde los conflictos lograron estructurarse por intermedio de sindicatos o de asociaciones campesinas, la implantación de los protagonistas armados ha producido una mezcla de violencia “estratégica”, que implica la subordinación de las organizaciones sociales, y de violencia ordinaria, que socava la vida colectiva y que, al cabo de algún tiempo, la aniquila.

Las identidades colectivas de tipo cultural no han estado, por lo demás, muy expandidas en el caso colombiano. El mestizaje (muy antiguo), los incessantes desplazamientos de población y, sobre todo, la omnipresencia de las redes ligadas a los dos partidos tradicionales, que no responden a ninguna (o muy poca) geografía cultural u oposición social, son algunos de los factores que pueden explicar este hecho. La pertenencia a los partidos tradicionales y a la iglesia católica, garante hasta 1970 del orden social, han sido, de hecho,

instrumentos de definición cultural durante largo tiempo para la mayoría de la población.

Estos elementos, de larga duración o de coyuntura, permiten comprender la fragilidad de los vínculos colectivos, pero no son suficientes para interpretar la “adhesión” a las nuevas redes armadas si, además, una violencia muy concreta no hubiera tocado amplios sectores de la población. Al menos en las zonas de colonización, la referencia a Hobbes parece justificada. Frente a expresiones múltiples de violencia, se presenta de hecho una especie de pacto para entregar a un soberano local, en este caso a la guerrilla o a los militares y paramilitares, el monopolio de la fuerza. En otras zonas, la “adhesión” puede tomar otras vías. En lugar de Hobbes, es mejor tal vez colocar en estos casos simplemente a Olson: la coacción es presentada como la condición de una “reconstrucción” de la colectividad.

Decisión o imposición: en cualquier caso es evidente que la referencia al “orden” es supremamente esencial. No es por casualidad que los sujetos del nuevo soberano justifican el abandono de su libertad en la existencia finalmente de un soberano que “hace justicia”. El hecho de que esta justicia pase por la eliminación de numerosas personas no hace más que reforzar el deseo de los sujetos de bloquear la difusión horizontal de la violencia reservando su ejercicio al “Uno” por encima de ellos.

A diferencia de Hobbes, el soberano puede fácilmente ser reemplazado. Los paramilitares pueden tomar el lugar de la guerrilla con la condición de que instauren ellos también el “orden”. Por segunda vez nos remitimos de alguna manera a Olson: en una situación de extrema violencia y de extrema atomización de los sujetos (producto de esta violencia), el único criterio (o casi el único) de orientación de las conductas es utilitarista: ordena hacer lo necesario para preservar los intereses (comenzando por la conservación de la vida), inclinarse frente al soberano de servicio y callarse en lo demás, incluso si se tiene una opinión.

Esta es, si se quiere, una de las características del carácter “prosaico” de los fenómenos de violencia.

INTERACCIONES ESTRATÉGICAS Y DEGRADACIÓN DEL CONTENIDO POLÍTICO DE LA VIOLENCIA

Cuando los fenómenos de violencia se generalizan, las intervenciones de los protagonistas organizados pueden analizarse en términos estratégicos como un juego fluido entre redes que disponen de diversos recursos de poder. Sin embargo, esto implica que, incluso en el caso de los protagonistas que se presentan como portadores de proyectos sociales o políticos, se produce un

desdibujamiento progresivo de este tipo de proyectos. Queremos sugerir de esta manera que en el momento en que las interacciones de los protagonistas organizados implican una redefinición del campo social como conjunto complejo y concurrential de redes de acción y de regulaciones locales y parciales, la referencia a lo político tiende a desdibujarse.

Comprobar la “despolitización” de los fenómenos de violencia que se extienden cada vez más no tiene nada de original. La mayor parte de los analistas lo aceptan y tratan de explicarlo por dos factores. El primero, se refiere a la tendencia de los protagonistas políticos (guerrillas pero también militares o paramilitares), a organizar prácticas como el cobro sistemático de rescates después de los secuestros o la fijación de impuestos a la población, que terminan convirtiéndose en fines en sí mismos, y haciendo parte de prácticas de bandidaje. El segundo, remite a las interferencias entre protagonistas políticos y protagonistas “económicos” (narcotraficantes).

Estos dos factores no pueden ser desatendidos. Pero la “despolitización”, nos parece, puede ser mejor comprendida si se considera simplemente que los actores, inicialmente políticos, están atrapados en lógicas de interacción estratégica dentro de las cuales se van redefiniendo con relación a los recursos que controlan, a las regulaciones que mantienen, a los intercambios y conflictos que los ligan a los otros actores. Estas tomas de posición atenúan poco a poco la dimensión propiamente política de cada uno de ellos.

En un sistema de acción de este tipo, las guerrillas, por ejemplo, toman el aspecto de simples redes de poder que disponen de medios de coerción. El crecimiento de su poderío desde el comienzo de los años ochenta no puede ser dissociado del beneficio que han logrado obtener del control de las zonas de producción de droga y, poco a poco, de las zonas de producción de otras materias primas (petróleo, oro, esmeraldas, productos agrícolas) e, incluso, de otras zonas de desarrollo industrial. Su expansión territorial, en apariencia impresionante puesto que ahora están presentes en más de la mitad de los municipios del país, es un resultado que se deriva ampliamente del cuidado que han puesto en extender su control sobre las riquezas nacionales. A partir de cierto momento se esfuerzan, con un éxito innegable, por controlar también la gestión financiera de los municipios. Esta estrategia pasa por la consolidación de su dominio sobre los territorios que consideran estratégicos y conduce, igualmente, a una transformación de la relación con las poblaciones que los ocupan. Las disputas desde hace mucho tiempo no pretenden “movilizar” o adoctrinar a las poblaciones; sólo buscan asegurar su dominio sobre ellas, e incluyen un esfuerzo por ejercer el monopolio sobre las condiciones de acceso a los empleos locales.

Es, pues, legítimo considerar a las guerrillas como simples redes de poder, que interfieren con otras redes de poder (narcotraficantes, militares, empresa-

rios) que poseen igualmente una cierta capacidad de control sobre los recursos y las poblaciones. Los medios de violencia no son más que un recurso suplementario. Los juegos estratégicos entre estas diversas redes se traducen en “regulaciones cruzadas” –para servirnos de una expresión de la sociología de las organizaciones– que, en función de sus características, definen los nuevos escenarios territoriales. La prueba es que nuevas regiones se han conformado como resultado de las interacciones violentas entre redes.

Hasta cierto punto se puede admitir, conforme a lo que proponen algunos de los partidarios del análisis estratégico¹, que la acción del Estado (a través de las administraciones civiles o militares) se inscribe también, al menos en el plano local, en los sistemas de acción que se conforman de esta manera como respuesta a la diversificación de las estrategias, y establece diversas relaciones con las acciones de los otros protagonistas. Se logra así generalizar el razonamiento estratégico y esclarecer los juegos entre redes.

Queda pendiente una pregunta fundamental, a la vez teórica y práctica: ¿en qué medida este razonamiento estratégico no disuelve la dimensión propiamente política? Las estrategias de los protagonistas anteriormente “políticos” de la violencia pueden ser esclarecidas a través de esta conceptualización que permite describir competencias, transacciones, alianzas, acuerdos, confrontaciones, regulaciones fluidas, y todo eso es, en este caso, supremamente útil. Pero lo político no se reduce a estos juegos de influencias así como la acción colectiva no se puede limitar a una “movilización” de recursos; lo político remite a otro plano donde nos encontramos con las decisiones en el sentido fuerte, lo no negociable, las instituciones, la legitimación concebida como algo más que el producto de las transacciones.²

Por consiguiente, la conversión de los actores colombianos en redes inmersas en sistemas fluidos y locales de interacciones debe ser descifrada en función de lo que ella significa: la pérdida de referencias políticas que se manifiesta al mismo tiempo en la manera como los conflictos sociales son obliterados y en la forma como las justificaciones políticas pierden toda credibilidad.

LA IMPOSIBILIDAD DE UN RELATO DE CONJUNTO DE LA VIOLENCIA

Es difícil no sorprenderse al observar que, más de treinta años después de su “cierre”, el primer episodio de violencia se sigue sustrayendo a la operación de

1 Por ejemplo, Friedberg (E), *Le pouvoir et la règle*, Paris, Seuil, 1993.

2 Como lo subrayan J. Leca y B. Jobert en su comentario crítico de *L'acteur et le système*. Cf. “Le déperissement de l'État: à propos de L'acteur et le système” de Michel Crozier et E. Friedberg, *Revue française de science politique*, 1980, p. 1125-1170.

“narración”, como si se tratara de una trama distendida, que por todas partes presenta vacíos. Los que tratan de evocar este período, independientemente de que lo hayan vivido o no, oscilan por lo general entre tres posiciones.

La primera consiste en asumir la identificación con uno de los campos políticos en conflicto y, por consiguiente, en reproducir sus argumentos. La segunda consiste en citar algunos acontecimientos, casi siempre los mismos, como si éstos, por sí solos, reemplazaran la narración. La última consiste en hacer referencia a la experiencia personal construida, igualmente, como una adición de acontecimientos fortuitos. La multiplicidad de los actores, de las escenas y de las lógicas contribuye a invalidar la elaboración de una narración de conjunto, a lo cual se agrega el hecho de que el muy prosaico desenlace dado a este episodio, consistente en el reparto del poder entre los dos partidos anteriormente enemigos, logró cubrir con un velo de ignorancia todo lo que se produjo y prohibió cualquier tipo de interrogación sobre su sentido y su injusticia. Haber dejado esta catástrofe en estado bruto tiene relación, por lo demás, con la atracción ejercida por las perspectivas abiertas por la violencia propiamente revolucionaria sobre los descendientes de las familias afectadas por la violencia que, sin duda, no han hecho más que tratar de dar un sentido a lo inexplicable del pasado.

Es claro que nos encontramos frente a una descripción que vale también para otras situaciones de violencia “generalizada” y es válida, en todo caso, para los fenómenos recientes de violencia. Aquí también existe la convicción compartida de que es imposible llegar, a este propósito, a una narración global. De las entrevistas realizadas en las regiones de violencia intensa se pueden extraer por lo menos tres indicaciones: a) Los relatos individuales, ligados a la experiencia de la violencia, no se inscriben en un relato más amplio; b) Los únicos relatos de conjunto de la violencia tienen la forma del mito y se encuentran ampliamente sustraídos a la historia; c) Los “hechos” tienen el estatuto de un real que no se deja insertar fácilmente en una historia significativa.

- a) – En los relatos que se refieren a experiencias individuales, las referencias a la “violencia” están siempre presentes. La trayectoria de vida es descrita a menudo como un desplazamiento espacial ininterrumpido, con la “violencia” colocada en el punto de partida, interviniendo en el curso de cada reorientación de la trayectoria, y que se encuentra de nuevo en la llegada, la cual, por lo demás, no es más que una nueva etapa. En el trasfondo se encuentra siempre la violencia de los años 1945–1960. No obstante, hechos recientes citados bajo el título de “hechos de violencia” comprenden también muchos incidentes, “políticos” o no, tanto como accidentes materiales o naturales (una inundación que destruye los cultivos). Estos rela-

- tos sugieren que los hechos no son siempre imputables a seres humanos y que, incluso cuando lo son, se los carga a menudo en la cuenta de una “fuerza inhumana” escondida detrás de los seres humanos, lo que es una manera de designar el exceso o lo no representable. Sin embargo, parece sobre todo evidente de por sí que no hay otra manera de hacer referencia a la violencia que contando su propia historia, lo que equivale a admitir que la “violencia” sólo se puede expresar a través de una infinidad de historias que no constituyen un conjunto.
- b) – La violencia de conjunto, sin duda, es evocada también. Y lo es a título de una trama que es la de toda la historia colombiana, pero que paradójicamente es presentada ella misma como no histórica: la violencia es la misma que se supone está presente continuamente en el siglo XIX y en el siglo XX (teniendo en cuenta incluso, como se sabe, que los años 1910–1930 estuvieron exentos, o casi exentos, de violencia). Los episodios de violencia aguda, por su parte, parecen regidos por el principio de la repetición: son pocos los que dudan de que la violencia actual es la continuación de la de los años 1945–1960 y que esta última es la continuación de la guerra civil. La obra de García Márquez da cuenta evidentemente, mejor que cualquier obra sociológica, de las estructuras míticas que soportan las concepciones de la violencia.
- c) – Los “hechos” se resisten a la inserción en una narración que no sea la de la experiencia individual, lo que no es verdaderamente asombroso. Si el mito es la única representación posible de la violencia y si la historia de conjunto es imposible, los hechos están allí para establecer la confluencia, bajo la forma de un real insuperable, entre el mito y la experiencia, y para reemplazar finalmente la historia. Por lo demás, estos hechos brutos se prestan a todas las fantasías interpretativas. La generalización de la violencia se acompaña, en efecto, de la disolución de una opinión pública susceptible de decidir acerca de su alcance y de su origen. Nos hemos podido dar cuenta de esto en el momento en que ocurrieron la serie de asesinatos espectaculares perpetrados entre 1989 y 1990. Mientras que desde el exterior se los podía imputar con alguna verosimilitud a sectores definidos (los narcotraficantes, por ejemplo) los asesinatos eran objeto de rumores que volvían responsables a las fuerzas más fantásticas. ☞

(Colaboración entregada en francés por el autor. Traducción de Alberto Valencia Gutiérrez, profesor de la Universidad del Valle)